

Concepción, cuatro de junio de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo presente:**

1°.- Que el artículo 687 del Código de Procedimiento Penal establece, que: *“Si después de la sentencia condenatoria cayere el condenado en enajenación mental, dictará el juez una resolución fundada declarando que no se deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad. El condenado cuya libertad constituya peligro será puesto a disposición de la autoridad sanitaria. Aquél cuya libertad no constituya riesgo será entregado bajo fianza de custodia y tratamiento, siempre que la pena o penas aplicadas constituyan en conjunto una privación o restricción de libertad por más de cinco años, si es inferior la condena, se le pondrá en libertad.*

*Siendo curable la enfermedad, se suspenderá el cumplimiento de la sentencia en una resolución fundada, hasta que el enajenado recupere la razón. El condenado cuya libertad constituya riesgo, y el que, sin estar en tal caso, haya sido condenado a penas superiores a cinco años de restricción o privación de libertad, será internado en un establecimiento para enfermos mentales; en las demás situaciones será entregado bajo fianza de custodia o tratamiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 692.*

*En cualquier tiempo que el enfermo mental recupere la razón se hará efectiva la sentencia si no hubiere prescrito la pena. Si ella le impusiere privación o restricción de la libertad, se imputará a su cumplimiento el tiempo que haya durado la enajenación mental.”*

Para adoptar las medidas a que se refiere este título, “se exigirá el dictamen de un perito, por lo menos, sea que haya informado durante la tramitación de la causa o que lo haga especialmente para la determinación de la medida aplicable”, correspondiendo solicitarlo al Servicio Médico Legal.

2°.- Que la defensa del sentenciado José Jacinto Otárola Sanhueza, solicitó a fs. 65 de estas compulsas, que conforme a la citada norma legal, se modifique la forma efectiva de cumplimiento de su defendido en un centro

penitenciario, por la entrega en custodia y tratamiento a su hija, en su domicilio, por haber caído en enajenación mental.

3°.- Así iniciada la incidencia, el tribunal, a fs. 153, requirió una pericia por médico legista, con especialidad en psiquiatría, para los fines de lo dispuesto en el artículo 689 del citado código, al Servicio Médico Legal, el cual encomendó su realización a la doctora doña Jacqueline Van Rysselberghe, psiquiatra del Departamento de Salud Mental de dicho Servicio, quien lo evacuó el 24 de mayo de 2024.

4°.- Que el informe 8-CCP-PQA-60-2024 que es objeto de la discusión y que rola a fs. 330 y siguientes, se indica que el 19 de abril recién pasado procedió a realizar la entrevista al sentenciado don José Jacinto Otárola Sanhueza y examinar los antecedentes médicos acompañados a los autos, de acuerdo con la normativa Técnica Pericial del Servicio, concluyendo que: *“En virtud de la lectura de la carpeta investigativa, la ficha clínica, la entrevista clínica y el examen mental, se puede informar que Juan Otárola Sanhueza presenta un deterioro cognitivo severo, dependiente del cuidado de terceros para sus actividades cotidianas por lo que puede ser considerado un enajenado mental. Este tipo de deterioro cognitivo es progresivo y no reversible y va afectando de manera creciente la vida diaria de las personas por lo que se hace necesario medidas paliativas para mejorar la calidad de vida, tales como estimulación neuropsicológica que retarde el deterioro cognitivo, algún tipo de terapia ocupacional que permita cierto entrenamiento para las actividades de la vida cotidiana y algún tipo de fisioterapia para paliar el deterioro físico que estos cuadros conllevan. Por todo lo anterior se puede decir que la libertad del imputado no representa un peligro en que pueda atentar contra él ni contra terceros”*.

5°.- Que el referido informe se tuvo por agregado a los autos, con conocimiento de las partes, para que dentro del plazo de tres días corridos formularan las observaciones y ejercieran los derechos que estimaran procedente. Lo anterior, porque el tribunal le pide al Servicio dicha pericia,

en cuanto órgano de la administración, quien debe designar al profesional competente que lo realice, y las partes y el tribunal se informan del mismo, sólo cuando es agregado al proceso.

**6°.-** Dentro del término señalado, las partes acompañaron documentos y formularon las siguientes observaciones y peticiones:

**A fs. 347, el abogado don Patricio Andrés Robles Contreras**, por sus representados, acompañó los documentos obtenidos a través de una petición de acceso a la información pública de la Dirección del Servicio Médico Legal, que dice relación respecto de la forma en que se nombró a la perito psiquiatra y copia del contrato de prestación de servicios a honorarios de ésta con el Servicio Médico Legal, los que rolan de fs. 350 a 354, y luego objeta el precitado informe, expresando, que la perito ha ejercido diversos cargos de elección popular como militante del partido político Unión Demócrata Independiente (UDI), el cual de forma sistemática ha relativizado las violaciones a los Derechos Humanos, graves y sistemáticas, ocurridas en la dictadura cívico militar de nuestro país, habiendo expresado que: *“La UDI no cambia nada: Van Rysselberghe acusa búsqueda de ‘ensañamiento judicial’ contra presos de Punta Peuco”*, aparecido en El Mostrador con fecha 06 de agosto de 2018.

Agrega, que según la información entregada por la Dirección Nacional del Servicio, la *“Dra. Van Rysselberghe está contratada para cubrir la brecha de psiquiatría del 2018-2022 para casos criminales, por ende, no tendrá participación en los casos mencionados”*, respuesta dada por la Dirección Nacional del referido Servicio, con fecha 16 de mayo de 2024 (oficio Nº 3979, de 16 de mayo de 2024), no obstante lo cual, la médico Sra. Van Rysselberghe Herrera emitió su informe con fecha 24 de mayo de 2024, de lo cual se desprende que ella no estaba asignada para evaluar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, como es el caso del Sr. José Jacinto Otárola Sanhueza, lo que demuestra una manifiesta falta de

objetividad e imparcialidad constitutiva de recusación de conformidad al artículo 232 Nº 2 del Código de Procedimiento Penal.

**A fs. 360 los abogados Sergio Alberto Bustos Peña, Francisco Santibáñez Yáñez y Hernán Fernández Rojas**, por sus representados objetan el informe pericial antes referido, solicitando se le reste toda validez jurídica y técnica, porque emanó de una funcionaria que desde la perspectiva técnica y formal es incompetente en el sentido de haber extralimitado el ámbito de sus facultades funcionarias de acuerdo a las materias para las cuales fue contratada y por carecer de conocimientos básicos en el ámbito forense, tal como lo demuestra el informe objetado, el que demuestra desprolijidad, inconsistencia y contradicciones que detalla.

**A 385, la abogada Paulina Zamorano Valenzuela y el letrado Gabriel Felipe Ramos Vieytes**, por sus representados, evacuan el traslado, objetando la pericia, por falta de imparcialidad y objetividad de la perito, incurriendo en la causal indicada en el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal, que señala como causal de recusación del perito, *“el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante”*. Expresa, que el actuar de la perito debe ajustarse con la Normativa Técnico Pericial del Departamento de Salud Mental, del año 2020, que instruye en su título V lo siguiente: Objeto: “La Normativa Técnica Pericial de Salud Mental tiene como finalidad principal entregar una serie de directrices en el ámbito médico legal, en las que se establecen definiciones, requisitos y lineamientos básicos para la ejecución de la pericia de psiquiatría, psicología y trabajo social y/o informe social, según corresponda en el Servicio Médico Legal ”. Así las cosas, la imparcialidad exigida por el código, la norma sobre elaboración de peritajes por parte de médicos legistas, indica en su número 7.4 lo siguiente: Causales de inhabilitación de un perito para realizar un peritaje: Un/a perito debe inhabilitarse para realizar determinados peritajes en los siguientes casos:

Vinculación personal, familiar, social o laboral con alguno de los intervinientes de la causa judicial. En el caso del familiar dentro del cuarto grado inclusive.

Vinculación terapéutica previa al peritaje, entre el perito y el peritado, o de algunas de las partes participantes del proceso judicial.

Vinculación mutua a una institución política o social que le reste imparcialidad al perito.

Cualquier otra circunstancia que comprometa el principio de imparcialidad del peritaje (Creencias, prejuicios, contratransferencia entre otros).

Añade, que es precisamente este último punto el que, a su juicio, controvierte todo el informe pues es un hecho público que nadie podrá discutir a esta altura, que la perito no solo es militante activa de un partido político que históricamente se ha mostrado como partidario de la dictadura, sino que la perito en sí mismo, ha construido un discurso de negacionismo sobre los hechos ocurridos durante ese periodo.

1. Respalda dichos de diputado Ignacio Urrutia, criticado por decir que "las víctimas de dictadura eran terroristas".

2. Califica como ensañamiento judicial lo que ocurre con ex uniformados al señalar textualmente que: "existe una suerte de persecución contra militares en retiro, que en algunos casos, va más allá de la búsqueda de justicia".

3. En entrevista a diario La Tercera expresó: "No fue una dictadura, fue un gobierno autoritario. Yo no conozco ninguna dictadura que haya entregado el poder democráticamente".

4. Así mismo, la perito ha realizado visitas a Punta Peuco, principal enclave carcelario en el que se encuentran recluidos ex agentes del estado condenados por violaciones a los derechos humanos, indicando en dicha oportunidad: "No me siento acomplejada, yo creo que aquellas personas que

están con enfermedades terminales deberían conmutarse para que la terminen en su casa" .

5. En entrevista, en programa televisivo "Estado Nacional", indica: "Cuando tú dices dictadura, aparece que el golpe fue una cosa impuesta por los militares y no fue cierto: en ese tiempo, hace cuarenta y tantos años, fue solicitada por la gente".

Los dichos, expuestos y que han sido expresados públicamente en distintos medios, reflejan no solo una opinión bastante clara respecto de los hechos mismos ocurridos durante la dictadura y por los cuales el peritado ha sido condenado, sino que, reflejan un interés anticipado en el resultado de la pericia, quitándole toda imparcialidad y objetividad en la elaboración del informe, lo que se contrapone precisamente al objetivo mismo de la pericia al convertir una opinión profesional en una opinión personal.

Respecto del fondo del informe, indica que utiliza como referencia dos informes psiquiátricos, el primero realizado por la Doctora María Silva Innocenti y un segundo realizado por la doctora Paola Castelli Candia. Sobre el primero, no existe en la causa, por lo que su mención no solo no puede tomarse en consideración, sino que permite despertar dudas legítimas respecto a la originalidad del informe presentado, toda vez que en él se hace mención a un informe inexistente para todos los efectos legales al no encontrarse acompañado al proceso. En cuanto al segundo, se trata de una testigo, la que fue tachada por su parte, al reconocer que recibió pago por su elaboración.

Termina solicitando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, se ordene al Servicio Médico Legal se practique un nuevo informe al condenado JOSE JACINTO OTAROLA SANHUEZA, esta vez emitido por un/a profesional que dé garantías de imparcialidad y de objetividad respecto de sus conclusiones.

Además, Si el tribunal lo estima necesario, en atención a la gravedad de los hechos expuestos y por existir motivos calificados, se designe perito ad

hoc para la realización del informe de facultades mentales del condenado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 224 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, proponiendo que el peritaje sea llevado a cabo por la médico especialista en psiquiatría adultos doña Paulina Alejandra Pizarro Ramonda, cuyos antecedentes se acompañan en el segundo otrosí de esta presentación, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal.

Acompaña copia de la Normativa dictada por el Servicio Médico Legal el año 2020, en donde constan los lineamientos y directrices a considerar para la elaboración de un peritaje como asimismo, las cualidades que debe reunir el profesional a cargo de dicha pericia; y Curriculum Vitae de la médico psiquiatra doña Paulina Alejandra Pizarro Ramonda.

**7°.-** Que el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal prevé que el perito es aquel que debe informar al tribunal y las partes sobre algún hecho en que la ley lo requiera o para apreciar algún hecho o circunstancia importante, en que fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de alguna ciencia, arte u oficio. Este debe ser evacuado por el profesional en forma objetiva e imparcial, lo que se desprende de las causales de recusación que contempla el artículo 232 del citado código, indicando que es causal de recusación, N° 2 el “interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante”.

Ahora, en el caso del Servicio Médico Legal, en cuanto órgano del Estado, con fecha 23 de septiembre de 2020, por Resolución Exenta N° 2349 del Director Nacional (S) aprobó la “NORMATIVA TECNICO PERICIAL DE SALUD MENTAL”, que en su número 7.4 señala que son: Causales de inhabilitación de un perito para realizar un peritaje: en los siguientes casos:

Vinculación personal, familiar, social o laboral con alguno de los intervinientes de la causa judicial. En el caso del familiar dentro del cuarto grado inclusive.

Vinculación terapéutica previa al peritaje, entre el perito y el peritado, o de algunas de las partes participantes del proceso judicial.

Vinculación mutua a una institución política o social que le reste imparcialidad al perito.

Cualquier otra circunstancia que comprometa el principio de imparcialidad del peritaje (Creencias, prejuicios, contratransferencia entre otros).

**8°.-** Que, como bien sostienen los querellantes, es público y notorio que la doctora Jacqueline Van Rysserberghe ha formulado declaraciones de apoyo a personas condenadas por violaciones de derechos humanos, al concurrir al CCP de Punta Peuco, expresando al Diario de circulación nacional "La Tercera", que "No me siento acomplejada, yo creo que aquellas personas que están con enfermedades terminales deberían conmutarse para que la terminen en su casa", dichos que como perito pueden reflejar un interés anticipado que le resta imparcialidad y objetividad en el resultado de la pericia, incurriendo así en la causal de recusación contemplada en el artículo 232, N° 2° del Código de Procedimiento Penal y en la inhabilidad contemplada en la "NORMATIVA TECNICO PERICIAL DE SALUD MENTAL", que en su número 7.4, en cuanto prevé como causal a "Cualquier otra circunstancia que comprometa el principio de imparcialidad del peritaje (Creencias, prejuicios, contratransferencia entre otros).

**9°.-** Que de lo reflexionado se colige que la perito debió inhabilitarse para realizar la pericia encomendada y al no hacerlo, se acoge la tacha respectiva, restándole toda validez, debiendo, en consecuencia, designarse un nuevo perito para realizar su cometido.

**10°.-** Que conforme a lo razonado precedentemente, no se emitirá pronunciamiento respecto del fondo del informe pericial.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas, se declara, **que se acoge la tacha deducida por los querellantes en contra de la perito doña**



**Jacqueline Van Rysserbergher** y por consiguiente se le resta toda validez jurídica a su informe 8-CCP-PQA-60-2024, que rola a fs. 330.

Que, en consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, se dispone que el Servicio Médico Legal de Santiago **designa, a la máxima brevedad**, a otro profesional médico psiquiatra adulto, **cuyo nombre comunicará al tribunal**, para que efectúe una pericia al condenado José Jacinto Otárola Sanhueza, que se encuentra cumpliendo en el CCP Bio Bio, **perito que deberá fijar fecha y hora para el reconocimiento o examen del periciado y comunicarlo al tribunal, con al menos tres días de anticipación**, a fin de ponerlo en conocimiento de las partes, para los efectos que correspondan.

Oficiese por la vía más expedita al Servicio Médico Legal de Santiago, adjuntándole copia de esta resolución.

Rol 27-2010 y acumuladas.

Dictada por don **Carlos Aldana Fuentes**, Ministro en Visita Extraordinaria.



En Concepción a cuatro de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.



